



INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP
Open Budgets. Transform Lives.

Boletín-electrónico

ENERO-FEBRERO 2010 No. 52

Fondos de desarrollo de las circunscripciones

Los Fondos de Desarrollo de las Circunscripciones ponen de cabeza a la rendición de cuentas: grupos de la sociedad civil de cinco países planean actividades de incidencia por Jennifer Sleboda, International Budget Partnership

El Fondo de Desarrollo de la Circunscripción en Zambia por Alexander Chileshe, Economics Association of Zambia
La sociedad civil responde al catalizador del fondo de desarrollo de la circunscripción en Tanzania por Semkae Kilonzo, Policy Forum

El fondo para el desarrollo de la circunscripción de la India por Sowmya Kidambi, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan e International Budget Partnership

Blog del IBP: Open Budgets

Visita el Blog del IBP [Open Budgets](#) y únete a las discusiones en línea sobre temas de finanzas públicas. Puedes comentar sobre lo que ya se ha publicado o enviar un email a Albert van Zyl albertvzyl@gmail.com con alguna aportación breve (que puede ser de 100 palabras), pero que debe expresar tu opinión o sugerir un recurso nuevo.

Salud y presupuestos

El debate del seguro nacional de salud "National Health Insurance" (NHI) en Sudáfrica por Saranne Durham, Idasa y Thokozile Madonko, International Budget Partnership

El presupuesto de salud de India 2010-11: el mal continúa por Ravi Duggal, International Budget Partnership

Presupuesto 2010: un camino escabroso para las finanzas públicas en Sudáfrica por Len Verwey, Idasa

Transparencia presupuestaria y apertura de información

Nueva política de apertura de información del Banco Mundial: ¿Cómo puede la sociedad civil asegurar su debida implementación? por Amy Ekdawi, Bank Information Center

Transparencia presupuestaria en Marruecos: Es Posible... por Elena Mondo, International Budget Partnership

Reto de la información sobre ayuda financiera de Publish What You Fund

Nuevo sistema de monitoreo de proyectos en Kenia: Alcances y límites por Peter Kariuki, Socio-Economic Rights Foundation

Herramientas y recursos en Internet

10 tácticas para convertir la información en acción por Philip Thigo, "Social Development Network" (SODNET)

Nuevo recurso de FAO: paquete metodológico del derecho a los alimentos por Ann Blyberg, International Human Rights Internship Program

UNIFEM lanza un portal de presupuestos con enfoque de género

Nuevo grupo Google sobre presupuestos participativos

Nueva base de datos del Revenue Watch Institute (RWI) sobre manejo transparente de recursos naturales

Nuevas publicaciones y anuncio

Nueva publicación: "The Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF Has Undermined Public Health and the Fight Against AIDs" por Rick Rowden

Nuevo reporte de Publish What You Pay: "Publishing What We Learned: An Assessment of the Publish What You Pay Coalition" por Mabel van Oranje y Henry Parham

Se solicitan aportaciones para el proyecto de investigación sobre participación ciudadana y acción cívica de combate a la corrupción por Shaazka Beyerle, "International Center on Nonviolent Conflict"

Los Fondos de Desarrollo de las Circunscripciones ponen de cabeza a la rendición de cuentas: grupos de la sociedad civil de cinco países planean actividades de incidencia por Jennifer Sleboda, International Budget Partnership

En febrero 2010 el International Budget Partnership (IBP) reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) de India, Kenia, Pakistán, Tanzania y Zambia en un encuentro de dos días en Washington, D.C., para discutir los Fondos de Desarrollo de las Circunscripciones (FDCs). Un FDC es un esquema de financiamiento descentralizado mediante el cual el gobierno central transfiere fondos a cada circunscripción para proyectos de desarrollo local. Bajo este esquema, los legisladores ejercen control sobre los fondos y la elección de proyectos. Los FDCs les dan a los legisladores la autoridad de implementar programas gubernamentales, violando su responsabilidad constitucional de legislar y vigilar. El objetivo de esta reunión fue compartir información sobre cómo operan los FDCs en los países representados y discutir estrategias para lanzar una campaña que enmiende o termine con los esquemas existentes y detenga su propagación a otros países.

El IBP se ha comprometido a una campaña internacional de incidencia sobre los FDCs en respuesta al gran interés en este tema por parte de la sociedad civil. Muchas organizaciones que colaboran con el IBP ya se están involucrando en campañas en contra de los FDCs debido al papel de los legisladores en el uso de fondos públicos y a que los FDCs promueven actos de corrupción, malos manejos y falta de vigilancia. Estos problemas son críticos conforme aumentan los países que adoptan los esquemas FDCs en todo el mundo (por lo menos 15 países ya han implementado FDCs y muchos más lo están considerando). Además la cantidad de fondos públicos que se destinan a los FDCs continúa creciendo.

Como un primer paso, el IBP comisionó una investigación sobre las características y los problemas con los FDCs existentes. Este [trabajo de investigación](#) examina los FDCs en India, Kenia, Pakistán, Filipinas, Tanzania y Uganda. El IBP organizó la reunión sobre FDCs

para discutir los resultados de la investigación, aprender más sobre esquemas FDCs específicos de parte de socios de la sociedad civil y desarrollar una agenda de investigación, objetivos y estrategias para una campaña de incidencia. La reunión comenzó con un resumen de los hallazgos de la investigación seguida de presentaciones por parte de socios del IBP:

- Sowmya Kidambi de “Kisan Shakti Sangathan” (MKSS) y del IBP discutió el FDC de India. Establecido en 1994, el esquema le ofrece a cada miembro del parlamento (MP) y miembro de la asamblea legislativa (MLA) US\$ 440,000 al año para gastar en proyectos en sus circunscripciones. Los MPs y MLAs tienen el poder de recomendar proyectos de desarrollo a los jefes distritales y seleccionar las localidades para efectuar proyectos favoreciendo a comunidades que votaron por ellos. Los comités de monitoreo no se han creado como lo exige la ley y las cabezas distritales rara vez inspeccionan los proyectos. Asimismo, la falta de coordinación promueve la duplicación de esfuerzos. Hasta la fecha, no existe una campaña en contra del FDC en la India, sólo esfuerzos aislados de parte de organizaciones individuales que trabajan para reformar o desechar el esquema.
- Hussein Khalid de “Muslims for Human Rights” (MUHURI) presentó el caso del FDC de Kenia. Establecido en 2003, el FDC recibe 2.5 por ciento del ingreso total del gobierno al año. Cada MP recibe aproximadamente US\$ 1 millón al año para gastar en proyectos de desarrollo en su circunscripción. Los problemas que surgen del FDC incluyen aumento en la corrupción a nivel local, proyectos de segunda debido a la falta de vigilancia y al uso de fondos de desarrollo como una herramienta política. Ante esta situación, MUHURI ha movilizó a comunidades para monitorear los fondos FDC mediante auditorías sociales. MUHURI cree que el FDC puede ser benéfico si los fondos no estuvieran en manos de los MPs y la ley FDC se fortaleciera para prevenir la corrupción y mejorar la vigilancia. MUHURI ha presentado una demanda ante la corte cuestionando la constitucionalidad de los FDCs con base en el papel de los MPs en la administración de recursos públicos.
- Ali Asghar Khan de la “Omar Asghar Khan Development Foundation” habló del FDC en Pakistán, el cual fue establecido en 1985 y es el que tiene mayor tiempo de existencia. Este FDC distribuye más de US\$ 19.5 millones—equivalente a 70 por ciento del presupuesto nacional para salud—a los miembros de la asamblea nacional (MNAs) y a miembros de asambleas provinciales (MPAs) cada año. MNAs y MPAs recomiendan proyectos de infraestructura a funcionarios distritales que los entregan a los comités de desarrollo del distrito para su aprobación. La fundación se opone al esquema porque compromete la función legislativa y de vigilancia de los legisladores, perjudica al gobierno local, legitima prácticas clientelares entre los legisladores y sus constituyentes y debilita la rendición de cuentas y la transparencia.
- Semkae Kilonzo de “Policy Forum” e Irenei Kiria de “Sikika” hablaron del nuevo catalizador del FDC de Tanzania (CDCF), que se aprobó por el parlamento en 2009. La sociedad civil se opone al CDCF ya que viola la división constitucional de poderes al darle fondos, directamente, a los legisladores para la implementación de proyectos. “Policy Forum” va a monitorear la implementación del CDCF además de encabezar una campaña para erradicar el esquema. (Para mayor información sobre el CDCF y la respuesta de la sociedad civil, ver “La sociedad civil responde al catalizador del fondo de desarrollo para la circunscripción en Tanzania” abajo.)
- Alexander Chileshe de “The Economics Association of Zambia” (EAZ) presentó el FDC de ese país. Establecido en 1995, el FDC de Zambia aumentó de US\$ 13,000 por circunscripción en 2006 a US\$ 148,000 en 2010. Los fondos FDC son controlados a nivel local por el legislador que representa la circunscripción. Este esquema se caracteriza por

su pobre administración financiera, corrupción y falta de vigilancia. EAZ recomienda que el FDC y las instituciones que lo manejan se sometan a una revisión urgente y que el desembolso de fondos se detenga durante este período. (Para mayor información sobre la respuesta de EAZ al FDC de Zambia, ver “El Fondo de desarrollo para la circunscripción en Zambia” abajo.)

Los participantes de la reunión estuvieron de acuerdo en que a pesar de las variaciones en los esquemas FDC, comparten el problema central de que los legisladores juegan un papel dominante en el control de los fondos de desarrollo, incluso en países en donde los lineamientos de FDC limitan su papel. Los participantes hablaron de la investigación que se necesita para definir o fortalecer sus campañas en contra del FDC en sus países y desarrollar una investigación común y una agenda de incidencia que abarque tres temas que se interrelacionan:

- la violación de la separación de poderes entre la legislatura y el ejecutivo
- la politización del desarrollo debido al control legislativo de la administración de los fondos de desarrollo
- el efecto del FDC en el desempeño de la legislatura, sobre todo su función de vigilancia

Para responder al primer punto, el IBP estuvo de acuerdo en comisionar a un experto para escribir un reporte legal sobre CDFs, detallando cómo transgrede la separación de poderes entre la legislatura y el ejecutivo. Para atender al segundo y tercer puntos, cada socio de la sociedad civil se comprometió a realizar una investigación y a reunir evidencia sobre los retos para el desarrollo causado por el papel de los legisladores en el FDC, así como los retos que impone a la función de vigilancia de la legislatura.

Finalmente, se concluyó que los dos objetivos de una campaña de incidencia sería el de reformar el FDC en países en donde ya existe y de frenar su propagación a otros países. El IBP se comprometió a hacer una investigación para determinar socios internacionales potenciales y metas para la incidencia del FDC.

Lea el [reporte](#) del taller sobre fondo de desarrollo para la circunscripción (CDF, por sus siglas en inglés) organizado por The State University of New York Center for International Development (SUNY/CID) del 8-9 de diciembre 2009. El proyecto SUNY/CID comisionó un conjunto de estudios de caso e investigación adicional para explorar el desarrollo y operaciones de los CDFs a nivel internacional.

Para mayor información, contactar a Jennifer Sleboda sleboda@cbpp.org.

El Fondo de desarrollo de la circunscripción en Zambia por Alexander Chileshe, “Economics Association of Zambia”

El Fondo de Desarrollo de la Circunscripción (FDC) en Zambia fue aprobado por el parlamento en 1995 para financiar proyectos comunitarios para la reducción de la pobreza. Bajo esta iniciativa, el gobierno asigna fondos de desarrollo cada año a las 150 circunscripciones en el país. Estos fondos están bajo el control de los miembros del parlamento (MPs), quienes también son miembros de los comités de desarrollo locales (CDC) que revisan y recomiendan las propuestas de proyectos para los CDF.

Conforme a los lineamientos del FDC, los CDC reciben propuestas de proyectos desde los subdistritos—comités de desarrollo, comités de desarrollo residencial y representantes comunitarios—y los asigna al subcomité de planeación del comité distrital de desarrollo para su valoración antes de recomendar propuestas al consejo del distrito.

Cada consejo distrital está obligado a incluir fondos FDC para proyectos de desarrollo local en sus presupuestos. El FDC está inmerso en la política de descentralización del gobierno. Por eso representa una de las transferencias de fondos más significativas hacia los consejos distritales. Los consejos están obligados a rendir cuentas por estos fondos conforme a la ley del gobierno local de Zambia de 1996.

El FDC en Zambia ha crecido aproximadamente de US\$ 13,000 por circunscripción en 2006 a US\$ 148,000 en 2010 y el interés por aumentar esta cantidad ha aumentado todavía más. Durante la campaña presidencial 2008, el Presidente Rupiah Banda prometió aumentar el FDC a aproximadamente US\$ 225,000 por circunscripción en tanto que el candidato de oposición habló de aumentarlo a US\$ 900,000, en caso de ser electo. Evidentemente, encontrar los recursos para este tipo de aumentos es una difícil tarea para cualquier presupuesto.

Los ciudadanos han expresado su preocupación sobre estos aumentos que parecen no tener límite: “Me pregunto cómo es que el gobierno puede enviar K1bn (US\$ 225,000) a cada circunscripción pero se niega a responsabilizarse por los trabajadores del consejo que no reciben salario desde hace 21 meses. . . mejor que le pague al personal del Consejo sus salarios antes de seguir enviando fondos al FDC” (*Zambian Prophet*, 26 octubre 2008).

Conforme a los lineamientos del FDC, el propósito del FDC es empoderar a las comunidades locales ofreciéndoles fondos para agricultura, salud, servicios sociales, educación y otras necesidades de la comunidad. Algunos proyectos positivos han sido completados, como los dos puentes nuevos que se construyeron por el estado de Katete en 2008. Al mismo tiempo, hay un gran número de proyectos que han desperdiciado recursos tal como los proyectos de cría de cabras, en donde no se encontró ni una sola cabra.

La corrupción es quizás el aspecto más alarmante del FDC. La mala administración financiera, el abuso y el mal uso de recursos públicos y la total indiferencia a los lineamientos del FDC y a la ley del gobierno local están a la orden del día. En 2008 el gobierno central sólo desembolsó US\$ 10.2 millones de los US\$ 11.1 millones originalmente planeados para el FDC debido a que algunas circunscripciones no reportaron fondos FDC en 2007. Parece que no hay una base de datos central con información sobre los proyectos y programas que han sido implementados desde la inserción del FDC. El sistema de archivos de papel es un desastre—información de 1995 a 2005 no se encuentra disponible. Queda mucho por hacer en la práctica para mejorar la administración, uso y monitoreo de estos fondos. Tal como se implementa hoy en día, el FDC representa un costo a la sociedad y, contrariamente a sus objetivos, profundiza la pobreza.

Otra consecuencia negativa del control de los legisladores sobre los FDCs es que se ha convertido en una herramienta política para premiar al fiel electorado. Por eso no sorprende que el presupuesto del FDC 2008 se diera a conocer dos semanas antes de las elecciones presidenciales 2008.

EAZ recomienda que el FDC y las instituciones que lo administran se sometan a una revisión urgente y que los desembolsos del FDC se interrumpan durante este período. Además, se debe de crear una base de datos central para proyectos FDC misma que deberá alojarse en el Ministerio del gobierno local y vivienda. Fuertes mecanismos para el aumento de la

rendición de cuentas y transparencia también se deben de implementar. Finalmente, la autoridad de los CDCs locales (a los que pertenecen los legisladores) sobre el uso de fondos FDC debe de transferirse al Departamento de planeación y al Comité coordinador de desarrollo distrital.

Para mayor información, contactar a Alexander Chileshe alexanderchileshe@hotmail.com.

La sociedad civil responde al catalizador del fondo de desarrollo de la circunscripción en Tanzania por Semkae Kilonzo, Policy Forum

En julio 2009 la Asamblea Nacional de la República Unida de Tanzania pasó la ley del fondo catalizador de la circunscripción para el desarrollo 2009 (Ley CDCF, 2009), que estableció el CDCF. El fondo es administrado en cada circunscripción por un comité CDCF, el cual es encabezado por el legislador o miembro del parlamento (MP) que representa el área. El comité CDCF inicia y supervisa la implementación y coordina todos los proyectos de desarrollo designados a nivel de la circunscripción.

El primer intento de pasar la ley CDCF fue en 2007, cuando el gobierno asignó US\$ 5.8 millones para el fondo en el presupuesto de ese año. La asignación para el CDCF recientemente en vigor aun se desconoce.

No sorprende que los MPs en Tanzania sean enfáticos en su apoyo al CDCF al decir que ofrecerá un mecanismo democrático para empoderar a los ciudadanos y que se financiará localmente y no por los donatarios. Los MPs argumentan que ya actúan como "máquinas ATM" en sus circunscripciones y que son percibidos como administradores de proyectos por el electorado. También dicen que deben de tener fondos discrecionales para gastar en sus circunscripciones como los miembros de las comisiones distritales y regionales. Como 2010 es un año electoral, la habilidad de los MPs de desembolsar fondos CDCF a sus constituyentes sin duda ha influenciado sus esfuerzos por aplicar el CDCF.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en Tanzania rechazan el CDCF porque el papel de los MPs en los fondos viola el Artículo 4º de la Constitución de la República Unida de Tanzania de 1977, el cual provee la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para asegurar los pesos y contrapesos. Además, el Artículo 63º de la constitución describe la función de la legislatura como un "gran inquisidor," que monitorea y hace escrutinio de las actividades del gobierno. Por lo tanto, los MPs están supuestamente obligados a llevar a cabo su papel de vigilancia mediante el monitoreo del trabajo de las agencias ejecutivas. Este papel se verá seriamente afectado cuando los MPs tomen la función del ejecutivo al administrar fondos públicos e implementar proyectos.

Otro problema con el CDCF es que establece sistemas paralelos a nivel distrital y aumenta el trabajo de los funcionarios distritales sin ofrecer fondos adicionales al gobierno local.

Para contrarrestar la percepción pública de los MPs como filántropos, la sociedad civil en Tanzania necesita concientizar a la gente sobre las funciones de los MPs respecto a la formulación de leyes y la vigilancia. Asimismo, los MPs deben de mejorar el funcionamiento de mecanismos locales de financiamiento existentes como el desarrollo y becas de capacitación y el Fondo de acción social de Tanzania, en lugar de crear nuevos. La sociedad civil también recomienda que los MPs aumenten su capacidad de hacer investigación y análisis para mejorar sus tareas legislativas y de vigilancia.

En respuesta a la violación del CDCF respecto a la separación de poderes, una coalición de OSCs encabezada por "Policy Forum" y por el "Legal and Human Rights Centre" (LHRC) decidieron poner a prueba la constitucionalidad de la ley CDCF 2009 en la corte. Con este proceso se espera alcanzar:

- Articulación legal de la separación de los tres poderes del gobierno y aclarar –a través de la corte – las funciones, deberes y límites de cada poder
- Apego de cada poder a sus deberes, mejoras a la democracia y buena gobernabilidad, menos fricciones entre el legislativo y el ejecutivo y mejores resultados de desarrollo
- Una declaración de que la puesta en vigor de la ley CDCF 2009 está fuera de los poderes constitucionales del parlamento y de que, obviamente, no es válida
- Una orden de que la ley CDCF 2009 se retire de los estatutos de Tanzania
- Alivio al mal uso de fondos públicos por parte del CDCF y una lección al parlamento de no aprobar leyes inconstitucionales en el futuro

Al poner a prueba la constitucionalidad del CDCF, "Policy Forum" y sus socios de la sociedad civil también intentan monitorear la implementación del CDCF para reunir evidencia de cómo se usan los fondos y de cuál es su impacto en el desarrollo y gobernabilidad local.

Para mayor información, contactar a Semkae Kilonzo coordinator@policyforum.or.tz.

El fondo para el desarrollo de la circunscripción de la India por Sowmya Kidambi, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan e International Budget Partnership

El esquema de desarrollo local para miembros del parlamento y miembros de la asamblea legislativa "Member of Legislative Assembly Local Area Development Scheme" (MP/MLA-LADS) de India se estableció en 1994. Este esquema crea un fondo diferente para los MPs y los MLAs y les delega autoridad para hacer recomendaciones sobre proyectos de desarrollo en sus respectivas circunscripciones con énfasis en la creación de bienes duraderos para la comunidad (como edificios de escuelas, pipas de agua, etc.) con base en las necesidades locales. Para los MPs y MLAs este esquema está al servicio del bien de la comunidad.

Los MP-LADS le dan a cada MP aproximadamente US\$ 445,000 para gastar durante el año financiero. Sin embargo, la cantidad asignada a cada MLA varía de estado a estado. Por ejemplo, MLAs en el estado de Rajastán reciben aproximadamente US\$ 134,000 al año, mientras que los MLAs en Andhra Pradesh reciben aproximadamente US\$ 111,000 al año. Estos fondos vienen del fondo consolidado del gobierno mediante una apropiación anual y las obras que escogen y recomiendan los MPs y los MLAs pueden ser obligatorios o discrecionales. El MP-LADS es un esquema financiado centralmente y es administrado por el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas. El MLA-LADS es administrado a nivel estatal.

En 1993 se hicieron dos enmiendas importantes a la Constitución de India, mediante las cuales la autoridad y los deberes del gobierno fueron descentralizados y se crearon cuerpos políticos locales. La democratización y empoderamiento fiscal de los cuerpos políticos locales trató de crear instituciones que rendirían cuentas de mejor manera a los ciudadanos locales más receptivos a las necesidades locales. Las corporaciones municipales y consejos

pueblerinos "Municipal Corporations and Gram Panchayats (Village Councils)," que resultaron de estas enmiendas son los cuerpos locales clave en India.

El MP/MLA-LADS se salió de la agenda de descentralización. Uno de los argumentos en apoyo al esquema es que el electorado le solicitaba a los MPs y MLAs la implementación de proyectos pequeños. Para completar estas obras rápidamente, los MPs y MLAs necesitaban usar los fondos a su discreción.

Bajo el esquema, cada MLA y MP puede escoger las obras y hacer recomendaciones al jefe de distrito. De conformidad con los procedimientos establecidos en los lineamientos del esquema, las obras recomendadas se implementan ya sea por un departamento gubernamental o cuerpo local a criterio del jefe distrital.

El problema es que los MPs y MLAs no son autoridades locales, sino que son electos para cumplir con funciones legislativas y de vigilancia. Asimismo, los consejeros municipales sólo son responsables del mantenimiento y reparación de obras a nivel municipal. Por lo tanto, el esquema aumenta la duplicación de funciones de los cuerpos locales y debido a la multiplicidad de autoridades, no se da la descentralización.

La idea original es que los MP/MLA-LADS creen bienes duraderos para la comunidad y hay cierto desacuerdo respecto a qué obras se deben desarrollar con los fondos. Los proyectos MP/MLA-LADS en zonas rurales incluyen caminos, drenajes y salones de clase, mientras que en zonas urbanas incluyen caminos peatonales y parques, entre otros. Sin embargo, muchos creen que aunque dichos proyectos son bienes duraderos para la comunidad, se deberían dejar a discreción de los gobiernos locales. Los fondos MP/MLA-LADS se usarían mejor para proyectos como comedores de medio día, deportivos, centros de recolección de basura, lugares de descanso para mujeres que trabajan, subterráneos y asilos públicos.

Los MP/MLA-LADS les prohíben a los MPs y MLAs usar los fondos para la compra de inventario o equipo, hacer obras de mantenimiento o reparaciones, construir estatuas, implementar obras en instituciones religiosas, adquirir tierras o llevar a cabo proyectos para el beneficio individual. Sin embargo, el contralor y auditor general "Comptroller and Auditor General's Report" (Reporte CAG 2005) establece que 80 por ciento de las obras implementadas bajo el MP/MLA-LADS fueron proyectos de reparación y mantenimiento, mientras otros involucraron a instituciones religiosas y prestaciones a individuos. Estos hallazgos confirmaron el mal uso de recursos por parte de este esquema.

Además, el reporte CAG 2005 encontró que 72 por ciento de las obras recomendadas por MLAs de 2000 a 2005 fueron para mejoras en caminos y sistemas de drenaje. El reporte explica que las mejoras en los caminos, el proyecto preferido por MLAs, está a cargo de la municipalidad o del departamento de obras públicas.

Otro problema es que muchos MLAs y MPs dejan muchos fondos sin ser usados por varios años ya que los fondos se pueden acumular, y entonces se gastan justo antes de las elecciones. Esto demuestra cómo el MP/MLA-LADS contribuye a prácticas clientelares y a la politización del desarrollo.

En 2007 la comisión para la segunda reforma administrativo en India favoreció la erradicación de los MP/MLA-LADS, diciendo que el esquema "seriamente perjudica la separación de poderes, ya que el legislativo se convierte directamente en el ejecutivo."

El 1999 se presentó un caso a la Suprema Corte de India por parte del director de "Common Cause India" para abolir el esquema por ser inconstitucional, discriminatorio y por no usar

los fondos debidamente. El asunto sigue en manos del jurado. Hasta el momento, el esquema MP-LADS ha erosionado los recursos financieros por casi US\$ 445 millones al año.

Ha habido varios intentos de parte de activistas y organizaciones de la sociedad civil por monitorear la asignación de los fondos LADS. El principal obstáculo que han encontrado es acceder a información sobre gastos reales, en lugar de información agregada. Esto a pesar de la ley del derecho a la información de India, la cual indica que toda la información debe de ponerse a disposición del público.

Aunque muchas organizaciones buscan tener acceso a información de los MP/MLA-LADS para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, no hay esfuerzos consolidados para monitorear cómo se gastan los fondos y evaluar el desempeño de un MP o MLA antes de las elecciones. Los esfuerzos individuales de parte de organizaciones y activistas se enfocan, sobre todo, en establecer normas de transparencia y rendición de cuentas para el esquema.

Para mayor información, contactar a Sowmya Kidambi sowmyakrishkidambi@gmail.com.

El debate del seguro nacional de salud “National Health Insurance” (NHI) en Sudáfrica por Saranne Durham, Idasa y Thokozile Madonko, International Budget Partnership

Desde 1994 Sudáfrica ha emprendido la difícil tarea de reestructurar el sistema de salud público. Los últimos 16 años han visto mejoras significativas en la política y legislación hacia la salud universal de conformidad con el deber constitucional del gobierno. La Constitución de Sudáfrica dice que “todos tienen el derecho a tener acceso a servicios de salud,” por lo que el gobierno sudafricano está obligado a cumplir progresivamente la calidad de los servicios de salud dentro de sus posibilidades.

Sin embargo, a pesar de los aumentos reales en el gasto a la salud pública, el impacto de dicho gasto ha sido perjudicado por el peso de enfermedades como el VIH/SIDA, condiciones de pobreza y daños). A fin de ampliar los servicios de salud y atender las presentes desigualdades, el gobierno de Sudáfrica argumenta la necesidad de introducir mecanismos de financiamiento novedosos, incluyendo una combinación de financiamiento público con recursos del sector privado reorientados al sector público.

La inequidad entre los sectores público y privado en Sudáfrica es muy significativa. Aproximadamente 15 por ciento de los sudafricanos están cubiertos por seguro médico privado. Un 20 por ciento adicional paga servicios de salud primaria de su propio bolsillo, pero aún depende del sector público para cuidado de hospital. El 65 por ciento restante de la población depende por completo del sector público para cubrir sus necesidades de salud.

Una parte importante del debate a la reforma de salud en Sudáfrica se enfoca en la introducción de un sistema nacional de seguro de salud “National Health Insurance” (NHI). La limitada información sobre los planes de un sistema NHI refleja poca o nula participación pública. Hasta la fecha, no existe documentación oficial sobre el NHI, a pesar de que dos documentos no oficiales se han infiltrado a la opinión pública. Estos documentos proponen un NHI sudafricano que ofrezca un paquete de salud universal, comprensivo y gratuito.

Se necesita de participación pública para que el NHI sea diseñado e implementado exitosamente en Sudáfrica. Además el NHI no debe de verse como la panacea de las

limitaciones financieras y deficiencias en los servicios de salud; sino como un mecanismo para garantizar que el máximo de recursos posibles sirva para cumplir con el derecho constitucional del derecho a la salud, sobre todo la salud primaria en Sudáfrica.

Para mayor información, contactar a Saranne Durham sdurham@idasa.org.za o Thokozile Madonko madonko@cbpp.org.

El presupuesto de salud de India 2010-11: el mal continúa por Ravi Duggal, International Budget Partnership

El contexto presupuestario

El presupuesto nacional de India para el año fiscal 2010-11 se publicó el 26 de febrero 2010 en un contexto en el que la inflación de alimentos sobrepasó el 22 por ciento. El Ministro de Finanzas (MF) Pranab Mukherjee declaró que “el presupuesto no puede ser una simple presentación de las cuentas del gobierno. Debe de reflejar la visión del gobierno e indicar las políticas venideras. Con las reformas económicas y de desarrollo, el enfoque de la actividad económica ahora está en los actores no gubernamentales, poniendo mayor énfasis en el papel del gobierno como ejecutor. Un gobierno mediático no busca darles directamente a los ciudadanos todo lo que necesitan. En lugar de ello busca crear un *ethos* facilitador para que la empresa y creatividad individual florezcan. El gobierno se enfoca en apoyar la prestación de servicios a los sectores más desprotegidos de la sociedad.”

Por primera vez desde que comenzaron las reformas económicas, el gobierno ha admitido la intención de abdicar el desarrollo al sector privado y convertirse en el medio. Ante esto, el MF anticipa tres retos:

- Regresar al alto crecimiento económico de 9 por ciento o más
- Hacer el desarrollo más incluyente—especialmente para la seguridad de alimentos, educación y salud
- Hacer que el sistema público, gobernabilidad y mecanismos de prestación de servicios sean eficientes, efectivos, transparentes y responsables

El MF también afirmó, “Para el gobierno el desarrollo incluyente es un acto de fe. En los últimos cinco años, nuestro gobierno ha creado atribuciones respaldadas por leyes para el derecho a la información y el derecho al trabajo del individuo. Esto ha sido seguido por la atribución del derecho a la salud de 2009-10 y la propuesta de la ley de la seguridad alimenticia. Para cumplir con estos compromisos, el gasto social ha aumentado gradualmente de Rs.1,37,674 crore, equivalente a 37 por ciento de la proyección para 2010-11. Otro 25 por ciento de las asignaciones planeadas están dedicados al desarrollo de la infraestructura rural. Con el crecimiento y oportunidades que genera, esperamos fortalecer el proceso de desarrollo incluyente.”

Estimaciones del presupuesto de salud

La asignación total para salud por el gobierno nacional se estima es de Rs. 251.54 billones. Esto es a penas 0.36 por ciento del PIB proyectado pero representa casi 28 por ciento del total del gasto nacional para salud de (aproximadamente Rs. 625 billón para 2010-11) ya que contribuye casi 75 por ciento. 40 por ciento del presupuesto para salud del gobierno es

para los gobiernos estatales. Sin embargo, el total del presupuesto de salud como parte del PIB está alcanzando 0.89 por ciento del PIB, que es todavía más bajo según el gasto real.

Presupuesto 2010: un camino escabroso para las finanzas públicas en Sudáfrica por Len Verwey, Idasa

Aunque la economía sudafricana salió relativamente rápido de la recesión que sufrió después de la crisis financiera global, el mediano plazo no se ve nada optimista. Los impuestos fiscales muy probablemente tomarán tiempo en recuperarse dejando a las autoridades fiscales sin más alternativa que ampliar los déficits en los próximos años en caso de que se cumplan los compromisos de gasto. De hecho, se espera que la deuda sudafricana aumente de 23 por ciento del PIB a más de 40 por ciento antes de 2013. Incluso con el aumento de préstamos, el presupuesto para 2010 propone aumentos muy bajos del gasto público. En vista de que muchos sudafricanos dependen del gasto público para su bienestar, los próximos años serán duros en muchos hogares.

El presupuesto 2010 continúa asignando una gran cantidad de recursos a la salud, educación y protección social en forma de ayuda financiera conforme a la disponibilidad de recursos, tal como la beca de apoyo infantil y la pensión estatal. Las becas sociales ahora representan un poco más de 3 por ciento del PIB en Sudáfrica con un aumento en el número de beneficiarios debido a la recesión y a que se extendió el período de elegibilidad para la beca de apoyo infantil.

Las transferencias de ingreso directas—como las becas—tienen un claro impacto en el bienestar de las viviendas. Sin embargo, como podemos ver en el gasto social programático para educación y salud, Sudáfrica continúa luchando por obtener los resultados para los cuales se asignaron los fondos. En Sudáfrica los indicadores para salud y educación con frecuencia son muy pobres en relación a aquellos países con recursos similares.

Lograr más resultados con los mismos recursos debe de ser una parte clave en el debate presupuestario en las próximas semanas y meses. Conseguir “valor por dinero”—término popular usado por el gobierno, sociedad civil y legisladores para indicar que el gasto ha dado el resultado deseado—requerirá de disposición y voluntad para asegurar la rendición de cuentas para el desempeño presupuestario. Obtener mejor valor por el dinero no sólo significa reducir la corrupción. Implica asegurar que las políticas reflejen las necesidades sociales muy claramente. Una forma clave de lograr esto es asegurar la participación ciudadana en la preparación, implementación y evaluación de políticas.

Sudáfrica todavía tiene un nivel de desempleo y una economía que lucha por alejarse de la dependencia en las exportaciones para su crecimiento. El presupuesto 2010 se enfoca en el desempleo e hizo varias sugerencias para atender el problema, incluyendo un subsidio para animar a las compañías a contratar trabajadores jóvenes sin experiencia. Otra sugerencia es que algunas partes de la legislación laboral sudafricana sean revisadas para promover la creación de empleos. Estas sugerencias, sin embargo, fueron criticadas por el Congreso de Sindicatos Comerciales Sudafricano “South African Trade Unions” (COSATU), el cual se opone rotundamente a cualquier reducción en los derechos laborales de los trabajadores o en el salario mínimo de los trabajadores.

En los últimos tres o cuatro años el gasto en infraestructura pública ha aumentado como porcentaje del presupuesto. En los años posteriores a 1994— igual que en los últimos años de apartheid— el gasto en infraestructura fue insuficiente y suscitó un grado de desindustrialización. En consecuencia, la economía sudafricana experimenta cuellos de botella en la infraestructura de transporte y energía en períodos de alto crecimiento. Aunque las necesidades del gasto en infraestructura deben de priorizarse existen preocupaciones respecto a la eficiencia y efectividad de dicho gasto, así como la transparencia e integridad de los procesos de adquisición de bienes. Esta situación resalta la importancia de la vigilancia del legislativo y de la sociedad civil en la implementación del presupuesto. En la actualidad las finanzas públicas de Sudáfrica son lo suficientemente transparentes para contar con una vigilancia fuerte: tanto documentos como reportes de gasto y de auditoría general pueden obtenerse con relativa facilidad. Sin embargo, hace falta una cultura fuerte de vinculación entre el legislativo y el ejecutivo, y entre el gobierno y la sociedad civil.

A pesar de ciertas expectativas de la izquierda, el presupuesto fue claro en retener el compromiso de Sudáfrica de seguir la política monetaria con enfoque inflacionario. La izquierda le había solicitado al banco central ampliar sus funciones para darle mayor consideración a los objetivos de crecimiento y empleo. Es probable que estos debates continúen en los próximos años.

En 2009 el parlamento sudafricano finalmente pasó una ley que le da poder constitucional para enmendar el presupuesto del ejecutivo. El presupuesto 2010 es la primera prueba de esta legislación y del poder del parlamento. Sin embargo, aún está desarrollando la capacidad institucional para cumplir con este papel efectivamente. Un requisito pendiente es establecer una oficina presupuestaria independiente y capaz para ofrecer apoyo al comité.

Sudáfrica pasó por una etapa de fuerte crecimiento con un presupuesto ávido de recursos entre 2003 y 2007. Mucho se hizo en este período para aliviar la pobreza, como extender la beca de apoyo infantil, ampliar la infraestructura para vivienda a comunidades previamente excluidas y priorizar el gasto de salud y educación. Sin embargo, los retos del desempleo e inequidad, en particular, siguen siendo graves. En los próximos años será vital abrir camino en este sentido, aunque los recursos públicos no aumenten. Las políticas deben ser de combate a la pobreza y con base en las necesidades reales de los ciudadanos; y la implementación de políticas debe de ser efectiva y eficiente. La sociedad civil puede y debe monitorear y evaluar la implementación de políticas de combate a la pobreza. Todas las partes necesitan jugar su papel para que la recuperación social de la recesión sea rápida y sostenible.

Para mayor información, contactar a Len Verwey lverwey@idasa.org.za. Para leer el reporte completo de Idasa preparado por Len Verwey, Saranne Durham y Musa Zamisa, ir a: <http://www.idasa.org.za/gbOutputFiles.asp?WriteContent=Y&RID=2788>.

Nueva política de apertura de información del Banco Mundial: ¿Cómo puede la sociedad civil asegurar su debida implementación? por Amy Ekdawi, Bank Information Center

El 17 de noviembre 2010 la mesa directiva del Banco Mundial aprobó un nueva política de apertura bajo el título "Toward Greater Transparency Through Access to Information: The World Bank's Disclosure Policy," misma que entra en vigor el 1 de julio 2010. Esta política

revisada rompe esquemas, no sólo para el Banco Mundial sino para todas las instituciones financieras internacionales, ya que por primera vez acepta el principio de que toda la información del Banco debe de estar a disposición del público, a menos de que caiga en el estrecho marco de excepciones.

Antecedentes de la apertura de información del Banco

Acceso oportuno a los documentos y toma de decisiones del Banco Mundial ha sido preocupación de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) por mucho tiempo. En los 1980s y 1990s las OSCs criticaban al Banco Mundial por financiar proyectos ambientales y sociales destructivos. Se descubrió que el Banco retenía información vital de las comunidades afectadas, negándoles el derecho a participar en las decisiones respecto al propósito, diseño e implementación de proyectos.

Frente a la crecientes críticas en 1985 el Banco adoptó sus primeras leyes de apertura. En 1991 OSCs empujaron al Banco a publicar evaluaciones ambientales antes de la aprobación de proyectos y en 1993 el Banco adoptó, formalmente, la apertura de información que introdujo los documentos de información de proyectos "Project Information Documents" (PIDs) en respuesta a la presión de la sociedad civil y de una amenaza del Congreso de E.U.A. de retener fondos. Los PIDs fueron dados a conocer antes de la aprobación de un proyecto y amplió el acceso a evaluaciones de los proyectos antes de ser aprobados. En 2001 el Banco revisó, por primera vez, su política de apertura y publicó documentos sobre préstamos de ajuste estructural (aunque sólo después de ser aprobados), reportes de proyectos terminados y el calendario de la mesa directiva. Sin embargo, la política 2001 que entró en vigor un año después tenía muchas lagunas:

- Aunque la política reconoce el principio de apertura, contradice este principio.
- El Banco ofrece una "lista positiva" de documentos que fueron publicados. Todo lo que no está enlistado se asumió bajo la política de no apertura.
- La política anterior contenía una lista de excepciones a la apertura, que estaban escritas tan vagamente que justificaban la retención de casi cualquier tipo de información.
- No había ninguna implementación de información.
- El sistema de solicitud de información carecía de un mecanismo de apelación para pedidos de información rechazados.

La nueva política

El 17 de noviembre 2009 la política se aprobó después de ser revisada. Esto se logró después de un año de revisiones y de múltiples reuniones en 33 países con ciudadanos, representantes del gobierno, OSCs, representantes del sector privado, academia, organizaciones internacionales y donatarios. La nueva política adopta cinco principios clave:

- Maximizar el acceso a la información, mediante la adopción de una "lista negativa" en lugar de una "lista positiva" como en la política anterior
- Una lista clara con los casos de "excepción" a la apertura de información
- Salvaguarda del proceso de deliberación
- Procedimientos claros para la apertura de información
- El derecho de apelación

La política también reconoce la importancia de traducir cierta información a lenguajes locales y promete examinar el marco existente de traducción del banco para asegurar un acceso más equitativo por parte de todos los interesados en los documentos.

Logros y brechas

Además de adoptar una “lista negativa,” por primera vez la nueva política incluye la apertura de rutina de documentos creados durante la fase de implementación de proyectos y programas. Esto le permitirá a la sociedad civil jugar un papel más activo para asegurar la debida implementación de las actividades que financia el Banco. La política también aumenta el acceso a reportes analíticos y de actividades de consejería. Además, un sistema de solicitudes será creado para incluir mecanismos de apelación internos y externos.

Sin embargo, la nueva política no es perfecta. Una de sus debilidades es la protección absoluta de información interna mediante el “proceso deliberativo”—una excepción que puede retener información y afectar la participación de la sociedad civil en procesos de toma de decisiones. Otra barrera es el poder de vetar que tienen los gobiernos y terceras partes, es decir, consultores del Banco que les permiten a los gobiernos bloquear la publicación de casi cualquier información que le ofrecen al Banco.

Implementación de la nueva política

La nueva política entrará en vigor el 1 de julio 2010. Para facilitar la transición, el Banco desarrolló un detallado plan de implementación a partir de la aprobación de la política y de un grupo de trabajo para el acceso a la información “Access to Information Working Group” (AIWG) creado bajo la supervisión del vicepresidente de relaciones externas del Banco para implementar la política. AIWG comprende siete subgrupos:

- El subgrupo del manual de la política: desarrollará los lineamientos internos de la política y el manual del personal
- El subgrupo de clasificación: creará criterios de clasificación y descalificación de documentos del Banco
- El subgrupo de sistemas y servicios: ofrecerá soporte técnico
- El subgrupo de comunicaciones: asegurará que tanto el personal del Banco como actores externos entiendan la política y sus requisitos
- El subgrupo de capacitación: desarrollará los programas de capacitación para la debida implementación de la política
- El subgrupo de traducción: examinará el marco de traducción existente y determinará cómo asegurar el acceso de cierta información del Banco por parte de los ciudadanos que no manejan la lengua oficial del Banco, es decir, el inglés
- El subgrupo de información pública: fortalecerá los servicios de información pública y el acceso a información de campo

El papel de la sociedad civil en el período de transición

En reconocimiento a que la sociedad civil es un actor importante afectado por la política de apertura, el Banco invitó a las organizaciones con base en Washington, D.C., “Bank Information Center” (BIC) e “International Budget Partnership” (IBP), así como al Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina a participar en la planeación de la implementación de esta política. El grupo se reúne regularmente con la secretaria general de AIWG y con los distintos subgrupos conforme sea necesario.

El Banco Mundial cree que dichas organizaciones—con su experiencia como miembros de redes más amplias y mediante sus esfuerzos continuos de difusión a las OSCs en muchos países en vías de desarrollo—pueden hacer aportaciones importantes a los distintos subgrupos. Las tres organizaciones planean consultar a sus colegas alrededor del mundo

sobre distintos aspectos de esta política para representar de mejor manera a una gama más amplia de OSCs en países en vías de desarrollo a la hora de asesorar al Banco a través de AIWG.

Para mayor información, contactar a Amy Ekdawi aekdawi@bicusa.org.

Transparencia presupuestaria en Marruecos: Es Posible... por Elena Mondo, International Budget Partnership

Transparencia Marruecos recientemente publicó un artículo en la revista económica *La Revue Economica* que presenta los resultados de la [Encuesta de Presupuesto Abierto 2008](#). El artículo explica el mediocre desempeño de Marruecos y recomienda cómo mejorar el nivel de transparencia presupuestaria en ese país.

El acceso a la información y el control social son fundamentales para una democracia sana. Ponen presión sobre el gobierno para asegurar una mayor eficiencia en el uso de fondos públicos e identificar y corregir malos manejos y prácticas corruptas. La Encuesta de Presupuesto Abierto reporta sobre el estado de la transparencia en el mundo, entendida como el acceso público a información presupuestaria oportuna y precisa. En el contexto global en donde la transparencia presupuestaria aparece como pobre, Marruecos sólo ofrece mínima información a sus ciudadanos. Aunque el puntaje de Marruecos ha mejorado ligeramente desde la evaluación anterior en 2006, todavía hay muchas deficiencias:

- El gobierno no produce ni publica un presupuesto ciudadano
- El reporte de medio año no se publica
- El reporte de auditoría no se publica
- Las cuentas fiscales de ingresos y egresos están agregadas y no ofrecen detalles suficientes
- El gobierno no ofrece información multi-anual en la propuesta del presupuesto
- El parlamento tiene poder limitado para enmendar el presupuesto del gobierno
- Hay suficiente evidencia de fondos secretos y extra-presupuestarios
- Hay una falta de interés en la ley regulatoria
- No hay ley de acceso a la información lo cual contribuye al pobre estado de la transparencia fiscal

El gobierno de Marruecos ofrece mínima información presupuestaria relevante que no les permite a los ciudadanos entender con claridad qué es lo que incluye el presupuesto o exigirle rendición de cuentas al gobierno por el manejo de fondos públicos. El acceso a información presupuestaria detallada sobre ingresos y egresos es muy limitada o inexistente, lo que dificulta el monitoreo de recolección de impuestos, gastos y préstamos durante el año. Además, las recomendaciones de auditoría no están implementadas lo que acentúa la falta de rendición de cuentas e imposibilita evaluar cómo se gasta el presupuesto. La vigilancia parlamentaria es débil e inefectiva y el dominio del ejecutivo sobre el proceso presupuestario es abrumador. De hecho hay muchos casos de fondos extra-presupuestarios que quedan fuera del control legislativo y ciudadano.

¿Qué se puede hacer?

En Marruecos, las mejoras inmediatas son posibles si se implementan las siguientes sugerencias:

- Preparar y publicar un documento antes del presupuesto, una revisión de medio término y un presupuesto ciudadano
- Incluir estimaciones multi-anales (por ejemplo, para el año fiscal y otras estimaciones anteriores o posteriores al mismo)
- Introducir y ejecutar una ley sobre el libre acceso a la información
- Consultar al parlamento y al público sobre las prioridades del presupuesto
- Publicar información que ya se encuentra disponible internamente (sobre la distribución de la carga fiscal y las condiciones relacionadas con la ayuda financiera internacional)
- Mejorar la calidad y relevancia de la información del presupuesto disponible al público
- Organizar audiencias públicas para mejorar la participación ciudadana en el proceso presupuestario
- Fortalecer la independencia de la corte de auditores al aumentar sus recursos humanos y financieros y publicar reportes de seguimiento

Se pueden hacer grandes avances rápidamente y a muy bajo, o sin costo, alguno. De 2006 a 2008 muchos gobiernos publicaron información que ya producían con fines internos o para donatarios internacionales, produjeron nueva información y suplementaron documentos ya publicados con información adicional. ¡Marruecos no debe de ser la excepción!

Para mayor información, contactar a Elena Mondo mondo@cbpp.org.

Reto de la información sobre ayuda financiera de Publish What You Fund

El reto de información sobre ayuda financiera "Aid Information Challenge" organizado por "Publish What You Fund", "Development Gateway", "The Open Knowledge Foundation", "2Paths" y "Aidinfo" reunirá a expertos internacionales en desarrollo y a programadores en varios eventos alrededor del mundo para desarrollar y fomentar herramientas para la transparencia y sugerir formas de publicar y utilizar la información de las bases de datos del Banco Mundial, "DfID" y "AidData." El objetivo es aumentar la comprensión, disponibilidad y acceso a información sobre ayuda financiera que sea comparable.

El primer evento del reto de información sobre ayuda financiera se llevó a cabo en Washington, D.C., el 6 de marzo y el segundo se realizó el 10 de abril en Londres. Estos eventos son sólo un paso en el proceso de aumentar la transparencia. Aún queda mucho trabajo por hacer antes, durante y después de estos eventos para que la información de estas bases de datos sea comparable, fácil de usar y lo mas versátil posible.

Para mayor información sobre el reto, ir a: <http://www.aidinformationchallenge.org> o contactar cormac.nolan@publishwhatyoufund.org.

10 tácticas para convertir la información en acción por Philip Thigo, "Social Development Network" (SODNET)

El paquete *10 tácticas para convertir a la información en acción* incluye una película y un conjunto de tarjetas con historias de 35 activistas de derechos humanos que han tenido

éxito al usar información y tecnología digital para crear cambios positivos en la sociedad. El paquete se creó en febrero 2009 a partir del Campamento de info-activism (www.informationactivism.org/iacamp) organizado por Tactical Tech (www.tacticaltech.org) en Bangalore, India. El campamento consistió de un taller práctico que reunió a 130 activistas de África, América Latina, Medio Oriente y Asia para implementar tácticas de activismo digital.

La película se presentó junto con el hit comercial *Avatar* en el programa radial *Digital Planet* de la BBC y *The Ecologist* la calificó como algo que "no debe perderse". La película ya ha sido transmitida en más de 50 países y rápidamente se está convirtiendo en el acompañante esencial de activistas de la sociedad civil por todo el mundo. La película se basa en las experiencias de 25 activistas de derechos humanos que han utilizado medios cibernéticos para movilizar acciones populares. Algunos activistas han usado Facebook para ilustrar las deficiencias en la infraestructura de hospitales y escuelas. Otros usaron SMS para verificar información al desarrollar boletas ciudadanas. Más específicamente, el programa INFONET del "Social Development Network" (SODNET) de Kenia usó SMS para ofrecerles a los ciudadanos oportunidades de hacer preguntas sobre transparencia presupuestaria.

La herramienta SMS de SODNET les permite a los miembros del público pedir información presupuestaria y vincularse con las autoridades a partir de preguntas con base en evidencia. Les permite a los ciudadanos indagar sobre asignaciones para educación, salud, agua e infraestructura social. La herramienta ofrece datos de proyectos y financiamiento (sobre todo respecto a los fondos de desarrollo para la circunscripción "Constituency Development Fund" (CDF) para que los ciudadanos y activistas usen el activismo con base en evidencia a nivel local. Por ejemplo, una joven usó la herramienta SMS y encontró que millones habían sido otorgados a su circunscripción. En un ciber-café y averiguó la cantidad exacta que recibió su escuela. Con la ayuda de sus padres, tomó la evidencia para hablar con los directivos de la escuela y preguntarles en dónde estaba el dinero, quién lo había recibido, qué criterio se usó para distribuir el dinero y cómo es que ella no recibió nada.

Hasta la fecha el sistema de seguimiento presupuestario de SODNET se utiliza por todo Kenia, recibiendo más de 4,500 SMS hits al mes y 200 hits al día en su página de Internet. Además ha sido solicitado por investigadores en Ruanda, Tanzania y Uganda. Los datos están accesibles en Google Maps cuando se puede y en Open Street Maps (www.openstreetmaps.org) para ofrecer información local.

Para ver la película o pedir el paquete, ir a: <http://www.informationactivism.org>, o <http://www.sodnet.org>.

Para mayor información sobre la herramienta de seguimiento presupuestario de SODNET, ir a: www.opengovernance.info.

Para mayor información sobre la proyección de la película en Kenia, contactar a pthigo@sodnet.or.ke.

Nuevo sistema de monitoreo de proyectos en Kenia: Alcances y límites por Peter Kariuki, Socio-Economic Rights Foundation

En un esfuerzo por aumentar la transparencia y rendición de cuentas alrededor del mundo sobre los proyectos y programas financiados por donatarios, el gobierno de Kenia ha dado a conocer el nuevo sistema electrónico de monitoreo de información e-ProMIS ("Electronic

Project Monitoring Information System"). Este sistema se apega a los requisitos de transparencia de la Declaración de París sobre efectividad de la asistencia. La tecnología e-ProMIS es el trabajo de "Synergy International Systems" una compañía estadounidense y se implementará conjuntamente por su socio local "Access Kenya Group." Esta tecnología monitoreará y analizará el flujo de asistencia y hará que esta información esté disponible al público. Cada ministro del gobierno puede usar el programa de e-ProMIS para monitorear y evaluar el desempeño del proyecto en cada fase. Para el fomento de capacidad se organizó un taller para el personal de 42 ministerios gubernamentales.

Este artículo presenta los alcances y debilidades del programa e-ProMIS desde el punto de vista de la sociedad civil y evalúa si ayudará a los esfuerzos de la sociedad civil y del público para monitorear los presupuestos públicos.

Las ventajas del sistema e-ProMIS son:

- Ha sido diseñado para satisfacer los requisitos del gobierno de Kenia. De modo que servirá como un medio confiable de información sobre las aportaciones de donatarios a la reconstrucción de Kenia, la recuperación económica y el desarrollo socioeconómico. También apoyará al gobierno a administrar la ayuda para el desarrollo y promover el uso transparente y responsable de recursos.
- La tecnología fomentará la habilidad de implementar agencias para producir reportes oportunos y precisos que sean críticos para el financiamiento de proyectos.
- El personal del gobierno ahora puede realizar sus labores cotidianas de manera más eficiente. Por ejemplo, pueden actualizar información de proyectos por Internet y generar reportes en cuestión de segundos.
- Le permitirá al público tener acceso a información sobre proyectos financiados por donatarios y por el gobierno, incluyendo el día de inicio, persona responsable, avances, costos, gastos en diferentes fases y fecha de terminación.
- Las agencias de implementación ahora recibirán reportes oportunos y precisos sin demoras eliminando casos de desembolso tardío de recursos.

A pesar de estas ventajas, la transparencia efectiva y rendición de cuentas respecto al financiamiento e implementación de proyectos en Kenia se ven afectadas por varios factores. Entre ellos está el marco legal que regula la transparencia de proyectos gubernamentales y gasto, la práctica de la administración presupuestaria, la voluntad pública para exigir información y su capacidad de revisión minuciosa y de uso. Queda por verse si la tecnología e-ProMIS resolverá estos retos.

También es importante notar que en 2004 el gobierno creó el "National Integrated Monitoring and Evaluation System" (NIMES para fortalecer y homogeneizar los sistemas de monitoreo y evaluación existentes a fin de ofrecer información creíble y completa de los niveles nacional, sectorial y distrital. Su cometido es mejorar los cimientos de las políticas con base en evidencia y la administración con base en resultados, algo instrumental para lograr los objetivos de "Vision 2030", es decir, el plan nacional de desarrollo del gobierno. La información de NIMES es utilizada para revisar el desempeño de los programas y estrategias del gobierno e informar decisiones, asignación de recursos y revisión de estrategias para hacer que el gobierno rinda cuentas de mejor manera a sus ciudadanos.

Estos puntos destacan que hay que poner atención a lo siguiente:

- No queda claro cómo e-ProMIS se vincula con el marco NIMES. Esto, a pesar de que dichos marcos están anclados en un marco político claro que anima a los ciudadanos a solicitar acceso a información pública.
- Tradicionalmente, generar información relacionada con la implementación de programas y del presupuesto ha sido costosa y los formatos de presentación dificultan su escrutinio por parte de parlamentarios, sociedad civil y medios de comunicación. El formato accesible de e-ProMIS puede imponer un reto a la voluntad de estos actores clave de interactuar con la información. Se necesitarán campañas de información pública sobre cómo los ciudadanos comunes y corrientes pueden aprovechar la información disponible.
- Aunque los consejos y condiciones de la ayuda de los donatarios a veces se publica aún queda mucha información que no es del dominio público. En la práctica, no toda la información está disponible al público respecto al uso de los fondos de donatarios y sus resultados. El promedio de proyectos terminados tampoco son público. Para ser efectivos, e-ProMIS debe de vincularse a un proceso de verificación público, ya que publicar la cantidad de fondos gastados en ciertos proyectos es sólo un aspecto de la rendición de cuentas. El monitoreo presupuestario no trata sólo de analizar "inputs"; sino también de analizar los procesos presupuestarios, asignaciones gastadas, eficacia en los resultados y el impacto. La participación de los beneficiarios objetivo en los procesos de monitoreo y rendición de cuentas puede fortalecer el sistema e-ProMIS.
- Finalmente, en ausencia de una relación clara con el marco NIMES, no es obvio cómo e-ProMIS se vinculará al proceso político. Tampoco queda claro si cuenta con la capacidad de generar información comprensiva y estructurada de los proyectos para satisfacer las necesidades de políticos, socios de desarrollo, sociedad civil y del público.

Para que los esfuerzos de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas sean exitosos y sustentables, todos los actores e instituciones involucrados necesitan desarrollar capacidades. Para mejorar la transparencia y rendición de cuentas, un sistema pesos y contrapesos es esencial. La tecnología e-ProMIS ciertamente contribuye a esto, pero para tener éxito, debe insertarse en los sistemas comunes de monitoreo y evaluación y anclarse en una plataforma clara de participación pública.

Para mayor información, contactar a Peter Kariuki peter.kariuki@serights.org.

Nuevo recurso de FAO: paquete metodológico del derecho a los alimentos por Ann Blyberg, International Human Rights Internship Program

La Unidad del Derecho a los Alimentos de la Organización para los Alimentos y la Agricultura "The Right to Food Unit of the UN Food and Agricultural Organization" (FAO) publicó un valioso recurso para ayudar los individuos, organizaciones, e instituciones afectadas por el hambre y la desnutrición en el mundo. El paquete metodológico del derecho a los alimentos es una serie de cinco libros, cada uno de los cuales atiende una dimensión del trabajo que los gobiernos y la sociedad civil tienen que hacer para reducir el hambre y la desnutrición. El último libro de la serie se enfoca en el análisis de presupuestos y el resto cubre las áreas de gobernabilidad y protección de los derechos, que de acuerdo con los analistas de presupuestos, es un complemento al trabajo de análisis de presupuestos.

El libro 1 es una guía sobre legislación para el derecho a la comida. Las leyes son la

materialización de los derechos humanos ya que afirman la existencia de aquellos derechos, ofrecen estándares mediante los cuales se puede evaluar el cumplimiento de los derechos y especificar recursos mediante los que las personas pueden exigir sus derechos. El libro incluye una discusión sistemática sobre cómo desarrollar o reformar provisiones y leyes constitucionales relacionadas con la agricultura, programas de alimentos y nutrición, tierra, agua y otros ámbitos para cumplir con el derecho a los alimentos.

El libro 2 (en dos volúmenes) trata sobre métodos para monitorear el derecho a los alimentos. Este libro fue desarrollado en reconocimiento al hecho de que el cumplimiento de cualquier derecho requiere de vigilancia: mantener un ojo vigilante, así como evaluar lo que hace un gobierno para cumplir con los derechos y llevarle los hallazgos a una audiencia más amplia para presionar al gobierno a implementar mejorías. El libro incluye un inventario de los distintos procesos y programas gubernamentales que afectan el derecho a los alimentos y que se deben monitorear y describe útiles metodologías para hacerlo.

El libro 3 es una guía para evaluar del derecho a la salud, dirigida a los gobiernos, que son los principales responsables del cumplimiento de los derechos. La acción efectiva para reducir el hambre y la desnutrición requiere de políticas, planes y programas bien desarrollados. La evaluación de la situación en un país respecto a los alimentos, el hambre y la desnutrición, así como la condición de los mecanismos institucionales necesarios para cumplir con el derecho a los alimentos, son una base esencial de información a partir de la cual el gobierno puede construir una estrategia lógica.

El libro 4 es un esquema del derecho a los alimentos en donde se reconoce que la acción efectiva del gobierno requiere de funcionarios públicos informados, así como de una sociedad civil informada y activa. Ayuda tanto al gobierno como a las organizaciones de la sociedad civil, que desean educarse a sí mismas, sobre los aspectos del derecho a los alimentos y las leyes e instituciones esenciales para la efectiva realización de este derecho.

El libro 5 trata sobre el trabajo presupuestario para avanzar el derecho a los alimentos. Aquí se presenta, paso a paso, el proceso para analizar el presupuesto del gobierno para evaluar el cumplimiento con las obligaciones del derecho a los alimentos. Este volumen fue coordinado por IHRIP con el apoyo clave del IBP y otras organizaciones, también contiene información sobre iniciativas en tres países que producen “el derecho al presupuesto de los alimentos.”

El paquete metodológico es único pues reúne en un solo recurso las diversas dimensiones—leyes, monitoreo, evaluaciones estratégicas y presupuesto—para avanzar este derecho. No existe nada comparable para ningún otro derecho y por ello hay que felicitar a la FAO.

Para ver y bajar el paquete metodológico, ir a: <http://www.fao.org/righttofood>.

UNIFEM lanza un portal de presupuestos con enfoque de género

La página original de presupuestos con enfoque de género de UNIFEM se lanzó en 2001 para apoyar los esfuerzos de quienes trabajan para garantizar que el presupuesto y la planeación respondan de forma efectiva a los objetivos de equidad de género. La página también sirve como una red de intercambio de información y recursos entre países, grupos de la sociedad civil y organizaciones regionales e internacionales interesadas en presupuestos con enfoque de género. El nuevo portal incluye una sección de recursos con nuevo contenido sobre efectividad de la ayuda financiera, financiamiento para la equidad de

género y estudios de caso, ahora con más de 800 referencias disponibles en cinco idiomas. El portal también contiene perfiles y cómo contactar a expertos nacionales e internacionales en presupuestos con enfoque de género, herramientas de búsqueda y “social networking”, al igual que videos de eventos y talleres sobre presupuestos con enfoque de género.

Para mayor información sobre las iniciativas de presupuestos con enfoque de género de UNIFEM, ir a: <http://www.gender-budgets.org>.

Para contribuir al portal, contactar gender.budgets@unifem.org.

Nuevo grupo Google sobre presupuestos participativos

El Proyecto de presupuestos participativos (PB) y el grupo de presupuestos participativos de Facebook recientemente relanzó una discusión por email sobre PB. La discusión original de PB comenzó en 2005 en topica.com y ha sido actualizada en el formato de “Google Group” que es más fácil de usar. El objetivo de este grupo es facilitar el intercambio de información, discusión y colaboración entre expertos, académicos y activistas en PB. PB es un proceso democrático que se practica en cientos de ciudades alrededor del mundo, en donde los miembros de la comunidad deciden cómo asignar parte del presupuesto público. El grupo cuenta con 250 miembros alrededor del mundo y está abierto a todo el que quiera participar.

Para mayor información, ir a: <http://groups.google.com/group/participatorybudgeting>.

Nueva base de datos del Revenue Watch Institute (RWI) sobre manejo transparente de recursos naturales

El Revenue Watch Institute (RWI) lanzó una base de datos interactiva sobre investigación, capacitación, documentos políticos y videos sobre transparencia y administración de las ganancias derivadas de los recursos naturales. La base de datos reúne una selección de materiales de investigación de todo el mundo en varios idiomas y representa una combinación de mejores prácticas, análisis y experiencia.

Para mayor información, ir a: <http://resources.revenuewatch.org/>.

Nuevo reporte del “Overseas Development Institute”: “Greater Aid Transparency: Crucial for Aid Effectiveness” por Sam Moon y Tim Williamson

En “Greater Aid Transparency: Crucial for Aid Effectiveness” Sam Moon y Tim Williamson, investigadores del “Overseas Development Institute” (ODI) del Reino Unido, exploran la relación entre la ayuda financiera y los presupuestos de países receptores y entre la dependencia de la ayuda financiera y la transparencia presupuestaria. Los países receptores de ayuda financiera con frecuencia reciben información sobre ayuda financiera insuficiente (sobre todo a mediano plazo) y deben de tomar decisiones presupuestarias con base en información parcial, imprecisa y poco confiable. La información incompleta le dificulta a los legisladores y a la sociedad civil exigirles rendición de cuentas a los gobiernos que reciben la

ayuda, identificar discrepancias entre los montos de ayuda que se reciben y se gastan y monitorear y eliminar actos de corrupción y desperdicio. El análisis concluye con una explicación de la importancia de la ayuda financiera de los donatarios y de los sistemas de ayuda financiera a nivel nacional para desarrollar esquemas que armonicen la información de la ayuda financiera con los presupuestos de los gobiernos receptores. El análisis también identifica áreas de investigación para que la ayuda sea más efectiva en promover la transparencia presupuestaria.

Para ver el reporte, ir a: <http://www.odi.org.uk/resources/download/4673.pdf>.
Para mayor información, contactar a Samuel Moon s.moon@odi.org.uk.

Nueva publicación: “The Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF Has Undermined Public Health and the Fight Against AIDs” por Rick Rowden

En “The Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF Has Undermined Public Health and the Fight Against AIDs” Rick Rowden, experto en cómo los sistemas de ayuda financiera, comercio y finanzas afectan el desarrollo económico, analiza la relación entre el VIH/SIDA y otras enfermedades relacionadas con la pobreza con las ideas económicas neoliberales que han permeado al sistema económico global en las últimas décadas. De acuerdo con Rowden, las políticas de FMI de gasto limitado han exacerbado los problemas de salud pública—sobre todo el VIH/SIDA— en países en vías de desarrollo. El autor explica y critica la teoría neoliberal y su impacto en el desarrollo y evalúa los efectos de estas políticas en las instituciones globales y en los ministerios de salud de países en vías de desarrollo.

Para mayor información o para pedir una copia del libro, ir a:
<http://www.zedbooks.co.uk/book.asp?bookdetail=4333>.

Nuevo reporte de Publish What You Pay: “Publishing What We Learned: An Assessment of the Publish What You Pay Coalition” por Mabel van Oranje y Henry Parham

En “Publishing What We Learned: An Assessment of the Publish What You Pay Coalition”, Mabel van Oranje y Henry Parham detallan la evolución de “Publish What You Pay” (PWYP) desde su fundación en 2002. La coalición fue creada para abogar por mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de ingresos derivados de las industrias de petróleo, gas y minería y rápidamente se expandió a una red global de organizaciones comunitarias, ONGs internacionales y coaliciones de la sociedad civil en más de 70 países.

Las tres secciones principales del reporte cubren los orígenes y estructura de PWYP, evalúan la efectividad de la incidencia y políticas de PWYP y sus aspectos operacionales, además de revisar el futuro de la coalición. El reporte se basa en entrevistas con personas involucradas en la coalición PWYP, sobre todo representantes de la sociedad civil y está escrito en forma de preguntas y respuestas para que los lectores identifiquen los temas de interés.

Para ver el reporte completo y el resumen ejecutivo, ir a:
<http://www.publishwhatyoupay.org/en/resources/publishing-what-we-learned>.

Se solicitan aportaciones para el proyecto de investigación sobre participación ciudadana y acción cívica de combate a la corrupción por Shaazka Beyerle, “International Center on Nonviolent Conflict”

Con el apoyo del “International Center on Nonviolent Conflict” y una beca del “United States Institute of Peace”, se está llevando a cabo un nuevo estudio sobre cómo los actores cívicos y activistas anti-corrupción están movilizando a ciudadanos en el combate a la corrupción con estrategias y tácticas de no violencia. Esta investigación documentará y analizará la participación ciudadana y campañas y movimientos de acción cívica no violenta de combate a la corrupción y extraerá lecciones y mejores prácticas. El proyecto examinará las capacidades, estrategias, objetivos y demandas de estas iniciativas en lugar del fenómeno de corrupción en sí mismo, o las condiciones en las que ocurre. La investigadora que coordina este proyecto está en proceso de reunir ejemplos:

- Iniciativas, campañas o movimientos presentes o pasados (de las últimas dos décadas) sobre corrupción que hayan involucrado la movilización de ciudadanos y acciones cívicas no violentas a nivel local o nacional (los casos pueden enfocarse únicamente en la corrupción o pueden estar ligados a la pobreza, gasto del presupuesto, libertad de información, provisión de servicios estatales, gobernabilidad, democracia, crimen organizado, violencia, derechos humanos, degradación ambiental, etc.)
- Sugerencias de personas u organizaciones que conozcan casos o puedan difundir el estudio
- Recomendaciones de redes, boletines electrónicos, páginas de Internet, grupos virtuales, etc., mediante los cuales otros puedan ser notificados sobre el proyecto
- Reportes, libros o artículos sobre iniciativas ciudadanas y acción cívica no violenta de combate a la corrupción

Favor de notar que este no es un llamado a propuestas, nuevos trabajos, o investigadores. Si desea contribuir a esta investigación con la información mencionada, contactar a Shaazka Beyerle sbeyerle@nonviolent-conflict.org.

Para mayor información sobre el International Center on Nonviolent Conflict, ir a: <http://www.nonviolent-conflict.org/>.